

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, catorce (14) de julio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S. representada legalmente por el señor Richard Giovanny Suarez Torres identificado con cédula de ciudadanía 79.576.294 y tarjeta profesional 103.505 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como apoderado judicial inscrito en el certificado de Cámara de Comercio de dicha sociedad, y por sustitución de éste se le reconoce personería al doctor Edison Alejandro Guzmán Salazar identificado con cédula de ciudadanía 1.128.474.322 y tarjeta profesional 226.371 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 020 2019 00661 00, promovido por la señora **LILIANA MARIA ZAPATA MADRID** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante frente a la sentencia emitida el 1º

de febrero de 2021 por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, y revisar en consulta la misma providencia en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **139**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

La señora Liliana María Zapata Madrid demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: retroactivo pensional causado desde el 1° de marzo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019, intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que nació el 11 de agosto de 1959. Reclamó ante Colpensiones el 17 de mayo de 2019, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y la entidad por medio de la Resolución SUB 252742 de 2019, se la concedió, en cuantía de \$12.443.443, a partir del 1° de octubre de 2019, teniendo en cuenta para ello, 1.746 semanas de cotización, un ingreso de base de liquidación de \$18.572.303, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 67%. Frente al acto administrativo referido interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto en la Resolución SUB 277337 de 2019. Aduce que efectuó la última cotización al sistema de pensiones en febrero de 2017.

En sentencia proferida el 1° de febrero de 2021, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a pagar a la señora Liliana María Zapata Madrid, lo siguiente: la suma de \$400.269.712 por retroactivo pensional causado entre el 1° de marzo de 2017 y el 30 de septiembre de 2019, intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre dicho retroactivo pensional, desde el 17 de septiembre de 2019 hasta la fecha de pago de la obligación y costas del proceso.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de Colpensiones no comparte la decisión de primera instancia aduciendo que su representada dio cabal cumplimiento a las normas que regulan el caso en concreto, en particular el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que requiere la desafiliación necesaria del sistema para poder disfrutar la respectiva prestación económica, que además, el Decreto 692 de 1994 en su artículo 32, regula la obligación de los empleadores de reportar las novedades, llámese desvinculaciones o retiros de los trabajadores dependientes como es el caso de la actora, por lo que no resulta razonable ni proporcional imponer a la entidad una carga de tal magnitud dado que realmente lo que hace es estudiar de forma juiciosa y objetiva las historias laborales, para corroborar la novedad de retiro que debe de estar allí plasmada de forma inequívoca, y que no proceden los intereses de mora porque no hubo una negativa ni mala fe de Colpensiones, pues las actuaciones administrativas fueron estrictamente construidas con apego a la ley.

ALEGATOS DE CONCLUSION

El apoderado de la demandante presentó alegatos de conclusión solicitando se confirme la decisión de primera instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo

pensional causado desde el 1° de marzo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019 e intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre dicho retroactivo.

CONSIDERACIONES

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa en el expediente, la Sala encuentra:

1. Que la señora Liliana María Zapata Madrid nació el 11 de agosto de 1959.
2. Que la citada accionante el 17 de mayo de 2019 le reclamó administrativamente a Colpensiones, la pensión de vejez y esta entidad mediante la Resolución SUB 252742 de 13 de septiembre de 2019, notificada personalmente 3 días después, se la concedió con fundamento en el artículo 9° de la Ley 797 de 2003, a partir del 1° de octubre de 2019, teniendo en cuenta para ello, 1.746 semanas de cotización, un ingreso de base de liquidación de \$18.572.303, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 67% arrojó una mesada pensional por valor de \$12.443.443, prestación que se ingresaría en la nómina de octubre de 2019, pagadera en el mes siguiente. En el acto administrativo referido la administradora de pensiones advierte “...*el disfrute de la pensión reconocida será a la fecha de corte de nómina, es decir el 1° de octubre de 2019, toda vez que no se evidencia novedad de retiro presentada por ISAGEN E.S.P., último empleador del solicitante...*”.
3. Que frente al acto administrativo referido interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 27 de septiembre de 2019.
4. Que Colpensiones expidió la Resolución SUB 277337 de 7 de octubre de 2019, notificada de manera personal 3 días después, confirmado lo resuelto.
5. Que la señora Liliana María Zapata Madrid se afilió al sistema pensional del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, el 23 de febrero de 1983 y cotizó en dicha entidad de manera interrumpida desde esta fecha

hasta el 28 de febrero de 2017, siendo su último empleador ISAGEN S.A. E.S.P.

DEL RETROACTIVO PENSIONAL

Conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida se le aplican las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en dicha Ley.

Los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, contentivo del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, prevén que la pensión por vejez se reconoce a solicitud de parte interesada una vez colmados los requisitos mínimos para acceder a la prestación, pero se requiere la desafiliación del régimen para poder disfrutar de la misma.

Sobre el tema se ha pronunciado en diversas oportunidades la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y ha explicado que la causación y el disfrute de la pensión por vejez son dos figuras jurídicas distintas porque tienen identidad y efectos propios, pues la primera se da desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de semanas cotizadas, y la segunda, o sea, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están supeditados a la desafiliación del régimen. También ha dicho la Corporación en mención, que de manera excepcional, cuando en un proceso no exista la prueba de la desafiliación al sistema, ésta puede inferirse de hechos tales como la terminación del vínculo laboral del afiliado, la falta de pago de cotizaciones, el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, así como la solicitud de la prestación, que no dejen duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional (Sentencias de 1º de febrero de 2011, Radicado 38.776; SL 15091 de 2015; SL 5603 de 2016 y SL 5564 de 4 de diciembre de 2019, Radicado 72.652).

Como se indicó en precedentes la señora Liliana María Zapata Madrid nació el 11 de agosto de 1959, cumplió 57 años de edad en la misma fecha de 2016, y efectuó cotizaciones al sistema general de pensiones hasta el 28 de febrero de 2017, por tanto, conforme a lo antes anotado, a partir de esta última calenda ha de tenerse por retirada del sistema de pensiones.

DE LA PRESCRIPCIÓN DE MESADAS

En lo que respecta a la prescripción, conforme a lo previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hace exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.

El artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo consagra el mismo texto alusivo a la interrupción de la prescripción.

Según la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que esta Sala de Decisión comparte, el análisis consonante de los preceptos lleva a concluir que únicamente es posible interrumpir la prescripción una vez (Sentencia de 21 de febrero de 2012, Radicado 41.908 y SL 374 de 12 febrero de 2020, Radicado 67.868).

De acuerdo a la prueba documental se tiene: (i) Que la señora Liliana María Zapata Madrid cumplió 57 años de edad el 11 de agosto de 2016. (ii) Que efectuó cotizaciones al sistema de pensiones hasta el 28 de febrero de 2017. (iii) Que le reclamó administrativamente a Colpensiones el 17 de mayo de 2019 la pensión de vejez y la entidad mediante la Resolución SUB 252742 de 13 de septiembre de 2019, notificada personalmente 3 días después, se la concedió a partir del 1º de octubre de 2019. (iv) Que frente al acto administrativo referido se interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación el 27 de febrero de 2019. (v) Que Colpensiones expidió la Resolución SUB 277337 de 7 de octubre de 2019,

notificada de manera personal 3 días después, confirmado lo resuelto, y (vi) Que la demanda que dio origen a este proceso se presentó el 6 de noviembre de 2019, quiere ello decir que no operó en este juicio el fenómeno de la prescripción. En consecuencia, se tiene como fecha de desafiliación del sistema pensional el 28 de febrero de 2017, y como fecha de disfrute de la prestación, el 1° de marzo de la misma anualidad, por ende, se confirmará en este aspecto la providencia.

Así las cosas, las mesadas pensionales de 2017, 2018 y 2019 equivalen en su orden a \$11.586.067, \$12.059.937 y \$12.443.443. Por tanto, a la demandante le corresponde por retroactivo pensional causado entre el 1° de marzo de 2017 y el 30 de septiembre de 2019, e incluyendo la mesada adicional de diciembre de cada año, la suma de Trescientos Noventa y Seis Millones Doscientos Dieciséis Mil Novecientos Cinco Pesos (\$396.216.905), de acuerdo a la liquidación, y como dicho valor no coincide con el liquidado por el *a quo*, será modificado.

AÑO	IPC	MESADA	NÚMERO DE MESES	TOTAL
2017	4,09%	\$ 11.586.067	11	\$ 127.446.737
2018	3,18%	\$ 12.059.937	13	\$ 156.779.181
2019	3,80%	\$ 12.443.443	9	\$ 111.990.987
TOTAL				\$ 396.216.905

Este monto comprende las mesadas pensionales causadas hasta el 30 de septiembre de 2019, porque Colpensiones pagó la prestación a partir del 1° de octubre de la misma anualidad.

DE LOS APORTES EN SALUD

Conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 143 de la Ley 100 de 1993, la cotización para salud establecida en el Sistema General de Salud para los pensionados está en su totalidad a cargo de éstos.

Acorde al criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que esta Sala de Decisión comparte, el descuento por salud constituye una

condición esencial y necesaria al reconocimiento de la pensión, que opera por virtud de la Ley y se encuentra estrechamente relacionada con los principios que irradian el Sistema General de Seguridad Social, motivo por el cual el Juez al otorgar el derecho está facultado para autorizarla, porque el pagador de la entidad administradora es el llamado a hacerla efectiva y trasladarla a la EPS correspondiente (sentencias de 21 de junio de 2011, radicado 48.003; 14 de febrero de 2012, radicado 47.378; 6 de marzo de 2012, radicado 47.528 y SL 1478 de 9 de mayo de 2018, radicado 63.512).

A juicio de la Corporación mencionada, de no efectuarse tales descuentos, se desconocerían los principios orientadores de la prestación del servicio público esencial de seguridad social consagrados en el artículo 2 de la Ley 100 de 1993, en especial, los de universalidad y solidaridad, y los rectores del servicio público de la seguridad social en salud de que trata específicamente el Decreto 1920 de 1994. Adicionalmente, tal omisión podría comprometer los derechos de acceso a los servicios de alto costo que requieren un mínimo de semanas cotizadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, se autorizará a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido en este juicio a la actora, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS de preferencia de la pensionada.

DE LOS INTERESES MORATORIOS.

A juicio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a recibir el pago de las mesadas pensionales emerge del cumplimiento de los requisitos que la Ley exige para poder acceder a la pensión reclamada.

Sin embargo, en sentencias de 29 de mayo de 2003, Radicado 18.789, 13 de junio de 2012, Radicado 42.783, y 6 de noviembre de 2013, Radicado 43.602, el Alto Tribunal precisó que no resulta razonable imponer el pago de intereses moratorios en aquellos eventos en que la decisión de las administradoras de pensiones públicas o privadas de negar una prestación encuentren plena

justificación, bien porque tengan un respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la Ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los Jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a tales administradoras no les compete y les es imposible predecir. Lo anterior, teniendo en cuenta que en muchos casos la interpretación de la norma a la luz de los principios y objetivos que informan la seguridad social no coincide con el texto literal del precepto que las administradoras deben aplicar al momento de definir la procedencia de la prestación reclamada.

En el presente caso la Administradora de Pensiones convocada a juicio, negó el reconocimiento del derecho pensional, con fundamento en la interpretación que realizó del artículo 13 del Decreto 758 de 1990, y así lo dejó sentado en el acto administrativo respectivo, esto es, realizó una aplicación literal de la ley, decisión que, en este momento, aunque no es compartida por la Sala, fue justificada por la entidad demandada, lo cual permite absolver de los respectivos intereses moratorios en comento. En consecuencia, se revocará en este aspecto la providencia.

DE LA INDEXACIÓN

La indexación de la condena sobre el retroactivo pensional reconocido resulta viable, porque es el mecanismo objetivo de corrección monetaria que se aplica cuando las entidades administradoras que integran el sistema de seguridad social pagan tardíamente las obligaciones a su cargo, y la ley no prevé otra forma de solucionar su detrimento económico. Por lo tanto, se condenará a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Liliana Maria Zapata Madrid las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas.

En consideración a que la indexación se concede en favor de la actora, se precisa que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a tal actualización, por tanto, dichos valores no serán objeto de aplicación de la

misma, pues no puede la accionante beneficiarse de una actualización con base en una suma dineraria que corresponde al subsistema de salud.

DE LAS COSTAS

Las costas en primera instancia corren a cargo de Colpensiones y en favor de la señora Liliana Maria Zapata Madrid.

En esta instancia no se condena en costas, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto por la demandada.

Así las cosas, se confirmará, modificará, adicionará, revocará y aclarará la decisión que se revisa en apelación y consulta, por las razones expuestas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Modificar el monto del retroactivo pensional, así:

Se condena a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Liliana Maria Zapata Madrid:

- La suma de Trescientos Noventa y Seis Millones Doscientos Dieciséis Mil Novecientos Cinco Pesos (\$396.216.905) por retroactivo pensional causado entre el 1° de marzo de 2017 y el 30 de septiembre de 2019.

SEGUNDO: Se Autoriza a Colpensiones para descontar del retroactivo pensional reconocido en este juicio a la actora, las sumas que por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud esté en la obligación de trasladar a la EPS de preferencia de la pensionada.

TERCERO: Revocar la decisión de primera instancia en cuanto condenó al pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y en cuanto absolvió de la indexación del retroactivo pensional. En su lugar:

- Se condena a Colpensiones a reconocer y pagar a la señora Liliana Maria Zapata Madrid el retroactivo pensional, reconocido en este juicio, debidamente indexado, con la aclaración que sobre la suma que ha de efectuarse el descuento en salud no está sujeta a la indexación.
- Se absuelve a Colpensiones del pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

CUARTO: Las costas en primera instancia corren a cargo de Colpensiones y en favor de la señora Liliana Maria Zapata Madrid.

En esta instancia no se condena en costas, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación interpuesto por la demandada.

QUINTO: Confirmar en lo demás la decisión que se revisa en apelación y consulta.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eec7b1e82ce87a75fda8638f6667c6d7230469081f90dab84eaede8bbdbb5faa**

Documento generado en 14/07/2022 02:53:41 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>